

## REPÚBLICA DE COLOMBIA



### SALA DE DECISIÓN LABORAL

El diecinueve (19) de mayo de dos mil veintitrés (2023), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, procede a proferir sentencia de segunda instancia, en el presente proceso ordinario laboral promovido por la señora **PATRICIA DEL CARMEN HENAO ECHAVARRÍA** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES** (en adelante COLPENSIONES) y la sociedad **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.** (en adelante PORVENIR S.A), tramitado bajo el radicado No. 05001-31-05-002-2016-00547-01.

Al proceo también fue vinculado el **MINISTERIO DE HACIENDO Y CRÉDITO PÚBLICO** (en adelante MHCP).

El Magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos,

#### 1. ANTECEDENTES:

La demandante pretende con la presente acción judicial, que se declare la nulidad de su traslado al régimen pensional de ahorro individual con solidaridad (en adelante RAIS), ordenando su retorno al régimen pensional de prima media con prestación definida (en adelante RPM) administrado por Colpensiones, y como consecuencia, se condene a COLPENSIONES de reconocerle y pagar la pensión de vejez.

**Como fundamento fáctico de sus pretensiones** relata la actora que nació el 21 de enero de 1960, y que se afilió al RPM administrado por el ISS desde el 2 de octubre de 1978 hasta el 29 de enero del 2000, con un total de 817.29 semanas. Posteriormente se trasladó al RAIS por medio de la AFP PORVENIR S.A. en febrero del 2000.

Expone que PORVENIR S.A. no le suministró información consistente en la edad mínima y el saldo que debía acreditar en su cuenta de ahorro individual, es decir, con que IBC debía cotizar con el fin de obtener una pensión anticipada o completar el capital para poder acceder a una pensión de vejez digna, ni le informó la edad en la que se redimía el bono pensional, ni le informó de manera clara, precisa y veraz los alcances de su traslado de régimen, pues únicamente le vendieron ilusiones, propias de un vendedor y no de un asesor, no le suministró una información clara y fehaciente con respecto a las consecuencias legales y económicas que tendría su cambio de régimen pensional, pues no le manifestó que con su traslado perdería la posibilidad de pensionarse con el ISS, con unas condiciones que nunca variarían las cuales implican una edad de 57 años y una tasa de remplazo mas favorable, además no le realizó un estudio previo, individual y concreto sobre las ventajas y desventajas que le traería trasladarse de régimen.

Arguye que el 14 de enero de 2016, recibió respuesta de PORVENIR S.A. relacionada con la proyección de pensión de vejez, así mismo el 9 de junio de 2015 recibió respuesta de COLPENSIONES, en donde le indicaron que no era procedente dar trámite a su solicitud de traslado, por cuanto la información consultada indica que se encuentra a diez años o menos del requisito de tiempo para pensionarse.

## **2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA:**

La oficina judicial de primera instancia, despachó de manera desfavorable las pretensiones de la demanda, absolviendo a PORVENIR S.A., MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO y COLPENSIONES de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra por la actora.

Para fulminar condena, el *a quo* argumentó que la Corte Suprema de Justicia tiene fijada una línea jurisprudencial sobre el tema de la afiliación a un régimen pensional como las sentencias 31989 de 2008, 1055 de 2022, 1560 de 2022 y 1637 de 2022, que se sintetiza en la obligación de brindar una información completa, suficiente, idónea y comprensible sobre las características de los regímenes, determinando e informando la conveniencia e inconveniencia de uno y otro régimen y la carga de las AFP de demostrar que efectivamente entregaron la debida información a los afiliados al momento del traslado.

Luego, señaló que, si bien la carga de la prueba se traslada a las AFP, en el proceso hay 2 circunstancias que conllevan a la absolución de las entidades demandadas, por

un lado, si bien tiene la carga de la prueba el fondo privado, se presenta la inasistencia injustificada de la demandante a la audiencia y el interrogatorio de parte decretado, por lo que en esa medida se deben presumir ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión, razón a ello conforme a la contestación de PORVENIR S.A. lo que se acredita con la inasistencia es que efectivamente hubo una adecuada información al momento de la afiliación, por otro lado, conforme al artículo 181 del Código General del Proceso el juez debe tener en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo de la obligación que se surta en el transcurso del proceso, por lo que a la demandante le fue otorgada la pensión por parte de PORVENIR S.A., y que conforme con la línea jurisprudencial de la CSJ y el Tribunal Superior no procede la declaración de ineficacia de las personas pensionadas conforme a la Sentencia del Tribunal Superior de Medellín 05001310500720150129501, y la Sentencia de la CSJ SL 373 de 2021.

La sentencia no fue apelada, motivo por el cual se envió el expediente ante esta Corporación judicial con el fin de que surta el grado jurisdiccional de Consulta del fallo, en favor de la demandante.

### **3. DE LOS ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA:**

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, los apoderados judiciales de PORVENIR S.A., el MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDICO PÚBLICO y COLPENSIONES, allegaron escritos de alegaciones, en los que señalaron resumidamente lo siguiente:

#### **ALEGATOS DE PORVENIR S.A.**

##### **1. SOBRE LA INASISTENCIA DE LAS PARTES SIN JUSTIFICACIÓN Y LA CONFESIÓN:**

El artículo 77 CPLSS establece que “(...) si el demandante o el demandado, no concurren a la audiencia de conciliación, el juez la declarará clausurada (...)”, sobre estos, dependiendo el extremo de la controversia, que en este caso fue la parte actora, se generaría una consecuencia procesal, esta es, la de presumir “(...) ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la contestación de la demanda y en las excepciones de mérito (...)”

En cuanto a los hechos susceptibles de confesión, debe indicarse que éstos deben cumplir con las exigencias del artículo 191 del Código General del Proceso, esto es:

“(i) El confesante debe tener capacidad para confesar y poder dispositivo sobre el hecho que resulte confesado, (ii) los hechos deben ser adversos al confesante o favorables a la contraparte, (iii) debe recaer sobre hechos cuya demostración no exija otro medio de prueba, (iv) debe ser expresa consciente y libre, (v) debe versar sobre hechos personales del confesante o sobre los que tenga o deba tener conocimiento”.

Así las cosas, teniendo en cuenta que en la audiencia celebrada el día 19 de julio de 2022, ante la audiencia injustificada por parte de la demandante, el Juzgado determinó los hechos que se entendían por confesados y que en virtud de los mismos se entendía que mi representada brindó una información suficiente y que la demandante tomó una decisión consciente e informada, deberá confirmarse lo considerado por éste Despacho y por ende, confirmarse la decisión.

## **2. LA INEFICACIA DE LA AFILIACIÓN EN LOS PENSIONADOS:**

Si lo anterior no fuera suficiente, téngase en cuenta que dentro de las pretensiones de la demanda se solicita, groso modo, que se declare la ineficacia de la afiliación de la demandante al RAIS y que en virtud de dicha declaratoria, mi representada proceda al traslado de los dineros a Colpensiones, no obstante, teniendo en cuenta que **mi representada reconoció la prestación económica por vejez a la demandante desde el año 2017,** debemos remitirnos a la sentencia SL373-2021 del diez (10) de febrero de dos mil veintiuno (2021) de la Corte Suprema de Justicia, en la cual manifiesta que no procede la ineficacia de un pensionado.

Adicional a esta sentencia, podemos observar la sentencia de unificación con radicado 05001-31-05-007 2015-01295-01 del Tribunal Superior de Medellín, dentro de la cual podemos identificar cuatro argumentos principales para declarar la improcedencia de la ineficacia cuando el accionante se encuentre disfrutando de su pensión, así:

### **A) la concepción consecuencialista**

Atendiendo a la concepción consecuencialista de MacCormick establece que no es procedente en casos de pensionados por cuanto generaría una afectación a la estabilidad del Sistema General de Pensiones, para lo cual acude a la sentencia C-841 de 2003.

### **B) Diferenciación entre afiliados y pensionados**

Consideran que el precedente jurisprudencial construido hasta la fecha no es aplicable en caso de los pensionados, por cuanto se trata de casos de personas que aún tienen el estatus de afiliados, lo cual cobra relevancia porque acorde al Tribunal existe una

diferenciación normativa entre el estatus de pensionado y afiliado, en los siguientes términos:

“Es plausible que la diferenciación de las calidades de afiliado y pensionado a partir de los argumentos que se han expuesto y de toda la legislación que claramente los diferencia, verbi gratia, los artículos 13, literales b), e) y d); 87, 115 y 117 de la Ley 100 de 1993; permita apartarse del precedente de la Sala Laboral de la Corte sobre ineficacia de la afiliación, entendiendo que se está ante universo fáctico diverso cuando se trata de ciudadanos que ya se han pensionado.”

En relación con lo anterior, retoman un fallo emitido previamente por la Sala Primera de Decisión Laboral, con ponencia del Magistrado Hugo Alexander Bedoya Díaz, donde realizó una distinción entre el momento de la afiliación y aquel en que se empieza a disfrutar la pensión en proceso de radicado 00873, proferida el 18 de septiembre de 2018, que constituye un comienzo de precedente horizontal, así:

“Ahora, retrotrayéndonos al estudio de la improcedencia de que se declare la inexistencia del traslado en este caso en particular, la sala se remite a la sentencia SL17595-2017 con radicado 46.292 MP Dr. Fernando Castillo Cadena en donde en forma concreta se dijo “... Así, en el asunto bajo escrutinio, brillan por su ausencia, los deberes y obligaciones que la jurisprudencia ha trazado en aquellos casos de traslado entre regímenes, entre los cuales se destaca: (i) la información que comprende todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional; (...)”, entendiéndose con este último aparte de la providencia que si la información exigida data desde antes de la afiliación y hasta las condiciones del disfrute de la pensión, ello implica, que **una vez reconocida la pensión de vejez esa falta de información se entiende superada con la celebración del nuevo acto jurídico adelantado por la afiliada y que corresponde a la solicitud de la pensión de vejez a la sociedad Porvenir S.A y al reconocimiento y pago de la prestación económica, pues solo tenía la posibilidad de alegar la falta de información previo al disfrute de la prestación económica y no con posterioridad a ella, como ocurre en este evento.**” (Negrita por fuera del texto original)

Es necesario resaltar de la sentencia 31989 de 2008 de la Corte Suprema de Justicia, en la cual establece que la información debe comprender todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional, lo que implica, que una vez reconocida la pensión de vejez esa falta

de información se entiende superada con la celebración del nuevo acto jurídico, esto es el reconocimiento del estatus de pensionado.

### **C) Terceros de buena fe**

En los casos donde intervienen terceros de buena fe, quienes no han participado en la relación comercial inicial, el Tribunal manifiesta que se trata de una situación insostenible cuando intervienen tercero de buena fe, como en el caso de renta vitalicia, para lo cual, cita la sentencia C-841 de 2003 de la Corte Constitucional:

“Cuando se trata de la modalidad de renta vitalicia inmediata, la naturaleza misma del contrato no permitiría el traslado en ningún caso, dado que el afiliado adquiere la condición de pensionado desde el momento mismo en que contrata la renta vitalicia. Este tipo de plan pensional es, por expresa definición legal, un contrato irrevocable entre el afiliado y una aseguradora, mediante el cual el afiliado adquiere un seguro que le otorga al beneficiario y sus descendientes el derecho a recibir una renta vitalicia mensual.”

Ahora bien, es importante destacar las aclaraciones de voto de las Magistradas Luz Amparo Gómez Aristizábal y María Patricia Yepes, quienes refuerzan dicho acápite argumentando que, en los casos de renta vitalicia, el contrato celebrado con la aseguradora no se puede rescindir con base en el artículo 2294 del Código Civil, 80 y 107 de la Ley 100 de 1993.

Mientras en la aclaración de voto del magistrado Francisco Arango Torres, realizando un análisis de la jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, especialmente la sentencias SC-16669-2016/2005-00668 del 18 de noviembre de 2016, concluye que se debe privilegiar los terceros de buena fe que no hayan participado en el negocio jurídico inicial, “por principio se privilegia el interés de quien actuó de buena fe con base en la apariencia en preservación de esta, la regularidad y certidumbre del tráfico jurídico y de las relaciones jurídicas comerciales”

En igual sentido, es oportuno retomar el análisis expuesto en la aclaración de voto del magistrado Víctor Hugo Orjuela Guerrero, quien a partir de líneas argumentativas de la Corte Suprema de Justicia (Sentencia SL 1688 de 2019) y la Corte Constitucional (Sentencia T-662 de 3013), concluye que es imperativo que “el afiliado asuma una corresponsabilidad en la mejor definición de su situación pensiones, sin justificarse únicamente en que es lego o profano en materia de seguridad social, porque solamente

conociendo los alcances del sistema dual pensional en el país se podrá hacer uso correctamente de la seguridad social, ejercer adecuadamente los derechos ínsitos a la misma y cumplir cabalmente los derechos asociados”.

### **ALEGATOS MINHACIENDA:**

#### **“I. La oficina de bonos pensionales no funge como entidad de provisión social ni fondo, ni administrador pensional**

Es importante resaltar lo expuesto en la contestación de la demanda, adarando que a quien coresponde establecer si una persona interesada en trasladarse del Régimen de Ahoo Individual con Solidaridad (RAIS) al Régimen de Prima Meda con Prestación Defrnida adminstado por COLPENSIONES, es precsamente ala Adninistadora Colombiana de Pensiones "COLPENSIONES y el Fondo Privado de Pensiones al cual la persona se encuentra afiloadada, por lo cual tal como se indicó en la ptimera instancca,esta cartera NO ES COMPETENTE para pronunciarse respecto a esta clase de conflictos.

Ahora bien, como se ha dicho en otras oportunidades, esta Cateria Ministerial desconoce las circunstancias de modo, tiempo y lugar en as que ocurrió el trasado de la demandante al RAIS, no obstante, lo que si se pude concluir de la demanda y de la ltis que se abordó en su momento es que, no es que no resulta verosímil que la demandante desconociera por completo las condicones del RAIS, máxime cuando el traslado efecuado ocurrió hace más de 10 años y actualmente está pensionada por vejez, lo que demuestra que no era del todo ajeno para el extemo demandante su condición y las implcaciones de estar en un régimen o en el otro.

#### **II. Sobre la decisión de primera instancia**

Adicional a lo expuesto y respecto a lo decidido en primera instancia por el Juzgado de Origen, consideramos que en lo que respeca a esta Cartera Ministerial, las decisiones adoptadas se ajustan a derecho, razón por la que solicitamos respetuosamente se mantenga incólume lo decidido sobre la participación de esta Cartera Ministerial.

#### **II. Facultades del Ministerio de Hacienda y Crédito Público**

Por su parte, se insiste en lo relacionado a que esta Cartera Ministerial, no se encuentra legitimada en la causa por pasiva para dejar sin efectos o resarcir unos presuntos perjuicios que no causó y que de todas maneras no hay lugar a reconocer, respecto de los hechos que promueven este proceso, en contra del traslado de régimen pensional efectuado; en esos términos y partiendo de lo que legal y jurisprudencialmente debe entenderse por la falta de legitimación en la causa por pasiva, siendo aquella situación en la que se halla la persona que ocupa una posición dentro de la situación jurídica debatida, que le permite recamar o la hace destinataria de la recamación, según se trate, condición que como se indicó no se acredita en este litigio en lo que concierne al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Del mismo modo y, en virtud del principio de legalidad, es dable enfatizar que las facultades y deberes radicados en cabeza de las entidades públicas constituyen el contenido obligacional que estas deben cumplir y que, a su vez, autorizan a los particulares legitimados para hacerlos Cumplir. Así las cosas, dentro del marco legal que atribuye funciones al Ministerio de Hacienda y Crédito Público no hay ninguna norma que establezca para esta cartera la de hacerse cargo de obligaciones contraídas por otra entidad en ejercicio de sus funciones, sumado a que no está acreditada la existencia de UNA DESINFOMRACIÓN O ENGAÑO relacionado con el traslado de régimen pensional que voluntariamente efectuó la demandante.

Consecuentemente, es importante concluir ante este honorable Tribunal que,

3.1. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público no formuló recurso de apelación dado a que la postura del despacho fue correcta, al declarar probada la excepción de inexistencia de la obligación con ocasión a las funciones de esta Cartera. Y

3.2. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público cumplió con la totalidad de sus obligaciones.

#### **IV. Peticiones**

De lo anterior, respetuosamente solicito al H. Despacho tener en cuenta los argumentos expuestos en este escrito e incluso lo informado mediante la contestación de la demanda y en consecuencia de ello, confirme la decisión de primera instancia en el sentido de absolver a esta Cartera de cualquier tipo de condena o responsabilidad, reafirmando para tal evento la procedencia de las excepciones formuladas y en subsidio



a lo anterior, solicitamos respetuosamente se nieguen las pretensiones de la demanda respecto del Ministerio de Hacienda por resultar jurídica y materialmente improcedentes.

De esta manera y bajo la misma línea solicito muy respetuosamente a su señoría se siva:

4.1. En caso de mantener incólume el fallo atacado, solicito se confirme la asbolucion de la Nacion Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

4.2. Reafirmar lo establecido en el fallo apelado, concerniente a que no existe razón alguna para condenar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

4.3. Absolver a la Nacion . Ministerio de Hacienda t Crpedito Público de la totalidad de las pretensiones incoadas en la demanda presentada por el señor Mario Navarro y de las eventuales costas que se pudan reconocer en esta instancia.”

#### **ALEGATOS DE COLPENSIONES.**

Sea lo primero solicitarle analizar señores Magistrados, lo referente a la imposibilidad de traslado de régimen impuesta por el legislador consagrado en el artículo 2 de la ley 797 de 2003 el cual modifiko el literal e del artículo 13 de la ley 100 de 1993 y estableció claramente que el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren menos de 10 años para adquirir su pensión de vejez, supuesto jurídico en el cual nos debemos basar en el caso en concreto toda vez que la parte demandante solicito el traslado posterior al cumplimiento de la edad limítrofe establecida.

Ahora bien, la ineficacia invocada recae sobre un presunto error al que la parte actora fue inducida en razón a su desconocimiento, para lo cual se solicita a la sala tener de presente que el error, fuerza y dolo, es decir, los vicios del consentimiento deben ser probados, no simplemente referenciarse que los mismos se presentaron. La ineficacia de traslado invocada carece de viabilidad, la mera afirmación de la parte actora de lo que aconteció hace tantos años al momento de su traslado al régimen de ahorro individual no puede ser tomado como cierto absolutamente ya que han pasado muchos años y se desconoce qué fue lo que realmente aconteció, las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ese traslado y mas aunque no se cuenta con la presencia del respectivo asesor del fondo privado, tomar una decisión en dicha magnitud resulta incluso arbitrario y contravía principios legales y constitucionales como la seguridad

jurídica y el debido proceso, está establecido como regla general en derecho que la buena fe se presume y la mala fe se prueba y en el caso en concreto no quedo probada mala fe por ninguna de las partes.

Durante el curso del proceso se observó que la parte actora es una persona plenamente capaz según el artículo 1503 del Código Civil, ya que en el plenario no se acreditó lo contrario, que la misma bajo sus facultades de forma libre y espontánea suscribió una afiliación considerando que sería más favorable pensionarse con el fondo privado y posteriormente al enterarse de que había perdido beneficios procede a reclamar unos derechos como se indicó anteriormente bajo una modalidad judicial creada por nuestro legislador para las personas verdaderamente perjudicadas.

Es importante tener en cuenta que la demandante no asistió a la audiencia de conciliación e interrogatorio de parte.

Con base en la Sentencia SL373 de 2021 de la Corte Suprema de Justicia, no es procedente el reconocimiento de la pensión de vejez, toda vez que la demandante ostenta la calidad de pensionada en la AFP, es un estado jurídico que no se podría revertir, es un hecho consumado, es decir no podría volver la demandante al régimen de prima media, ya que no procede la ineficacia para pensionados, solo aplicaría para afiliados.

#### **4. PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER:**

El problema jurídico para resolver se circunscribe a establecer si la afiliación de la demandante al régimen pensional de ahorro Individual con solidaridad debe declararse ineficaz y en caso afirmativo, en qué términos y condiciones, se debe realizar, el traslado a COLPENSIONES del importe de las cotizaciones efectuadas en el RAIS por la demandante.

De concederse la pretensión de declaratoria de ineficacia ante referida, se verificará si es procedente la condena en contra de COLPENSIONES de reconocer y pagar la pensión de vejez a la demandante, y en caso afirmativo, los términos en que dicha prestación debe ser otorgada.

Tramitado el proceso en legal forma y por ser competente esta Corporación Judicial para conocer de CONSULTA de la sentencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes,

## 5. CONSIDERACIONES:

Para resolver el grado jurisdiccional de consulta, ha de señalarse en primer lugar que, como lo señaló el a quo, en este asunto en particular se presenta una situación especial, referida a que a la demandante se le reconoció por parte de PORVENIR S.A., pensión de vejez en la modalidad de garantía de pensión mínima, a partir del mes de febrero de 2017, en cuantía de \$1.267.986, situación que además se encuentra acreditada con los documentos obrantes a folios 89 a 92 del expediente (Documento 05 del expediente digital).

Teniendo en cuenta lo anterior, encuentra pertinente la Sala acoger, una vez más, la sentencia de unificación proferida por la Sala Especializada Laboral de este Tribunal el 14 de agosto del año 2019, en el proceso con radicado 05001-31-05-007-2015-01295-01, Magistrado ponente ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, en observación a lo previsto en el inciso último del artículo 35° del Código General del Proceso, concordante con el también último inciso del artículo 10° del Acuerdo PCSJA17-10715 del 25 de julio de 2017 del Consejo Superior de la Judicatura, con la que se fijó precedente judicial unificado con relación a la ineficacia del traslado de régimen de quien ostente la calidad de pensionado en el régimen de ahorro individual con solidaridad, providencia en la que se anotó lo siguiente:

*“Este universo fáctico descrito por la Corte no incluye a los pensionados, pues aunque una de las sentencias fundadoras de esta línea trató de un pensionado que se trasladó a PORVENIR, se trata de un caso di analógico, no inscrito en el precedente, por cuanto se trataba de una persona expresamente excluida del régimen de ahorro individual, al tener más de 55 años a la entrada en vigencia del sistema de seguridad social integral, estando inmerso en el contenido del ordinal b) del artículo 61 de la Ley 100 de 1993.*

(...)

*Pero las calidades de afiliado y pensionado ya han sido deslindadas por la Corte Constitucional, precisamente en un fallo con un claro enfoque consecuencialista. Al examinar la exequibilidad del artículo 107 de la Ley 100 de 1993, que limitaba la posibilidad de los pensionados de trasladarse entre administradoras, la Corte arguyó lo que se esbozará enseguida. Esta es la disposición: Art. 107. CAMBIO DE PLAN DE CAPITALIZACIÓN O DE PENSIONES Y DE ENTIDADES ADMINISTRADORAS. Todo afiliado al régimen y que no haya adquirido la calidad de pensionado, podrá transferir voluntariamente el valor de su cuenta individual de ahorro pensional a otro plan de capitalización o de pensiones autorizado, o trasladarse a otra entidad administradora.*

(...)

*Tal como se señaló anteriormente, el artículo 107 de la Ley 100 de 1993 busca alcanzar al menos dos fines claramente identificables: (i) garantizar un servicio*

*administrativo y financiero eficiente de los recursos del régimen de pensiones de ahorro individual con solidaridad; y (ii) asegurar la estabilidad financiera y la rentabilidad de las inversiones de la entidad administradora o aseguradora.*

*Estos dos fines están estrechamente ligados a los fines constitucionales de eficiencia, universalidad y solidaridad que orientan la prestación y ampliación de la cobertura de la seguridad social, en general, y del sistema general de pensiones, en particular. Por ello, garantizar un servicio administrativo y financiero eficiente y asegurar la estabilidad y la sostenibilidad del sistema, constituyen fines legítimos y constitucionalmente importantes en un Estado Social de Derecho como el colombiano.*

*(...)*

*Es plausible que la diferenciación de las calidades de afiliado y pensionado a partir de los argumentos que se han expuesto y de toda la legislación que claramente los diferencia, verbi gratia, los artículos 13, literales b), e) y d), 87, 115 y 117 de la Ley 100 de 1993, permita apartarse del precedente de la Sala Laboral de la Corte sobre ineficacia de la afiliación, entendiendo que se está ante universo fáctico diverso cuando se trata de ciudadanos que ya se han pensionado.*

*Este Tribunal, a través de su Sala Primera de Decisión Laboral, con ponencia del Magistrado Hugo Alexander Bedoya Díaz, realizó una fértil distinción entre el momento de la afiliación y aquel en que se empieza a disfrutar la pensión, que refuerza la razonabilidad del enfoque que en el caso que nos ocupa. Dice así la providencia, con radicado 00873, proferida el 18 de septiembre de 2018, que constituye un comienzo de precedente horizontal:*

*Ahora, retrotrayéndonos al estudio de la improcedencia de que se declare la inexistencia del traslado en este caso en particular, la sala se remite a la sentencia SL17595-2017 con radicado 46.292 MP Dr. Fernando Castillo Cadena en donde en forma concreta se dijo "... Así, en el asunto bajo escrutinio, brilla por su ausencia, los deberes y obligaciones que la jurisprudencia ha trazado en aquellos casos de traslado entre regímenes, entre los cuales se destaca: (i) la información que comprende todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional; (...)", entendiéndose con este último aparte de la providencia que si la información exigida data desde antes de la afiliación y hasta las condiciones del disfrute de la pensión, ello implica, que una vez reconocida la pensión de vejez esa falta de información se entiende superada con la celebración del nuevo acto jurídico adelantado por la afiliada y que corresponde a la solicitud de la pensión de vejez a la sociedad Porvenir S.A y al reconocimiento y pago de la prestación económica, pues solo tenía la posibilidad de alegar la falta de información previo al disfrute de la prestación económica y no con posterioridad a ella, como ocurre en este evento.*

*Por último, ha de reiterarse por esta Sala que sostener la tesis de la ineficacia de la afiliación para pensionados del régimen de ahorro individual es un camino que puede conducir a situaciones del todo insostenibles, por cuanto la consolidación de ese nuevo estatus supone en muchos casos la participación de terceros de buena fe, como cuando se ha optado por pensionarse bajo la modalidad de renta vitalicia y se ha contratado con una aseguradora su pago. Las palabras de la Corte Constitucional, en la mentada sentencia C-841 de 2003, acuden con autoridad para esclarecer ese reductio ad absurdum. (...)*

Asimismo, ha de señalarse que, en la Sentencia de Unificación antes citada, se trae a colación, el artículo 12 del Decreto 720 de 1994, que establece, que la obligación de la AFP no se ciñe solamente a la antesala del traslado, sino también: *“durante toda la vinculación y con ocasión de las prestaciones a las cuales tenga derecho el afiliado”*, norma que permite inferir que una vez solicitada la prestación económica de vejez ante la AFP y obtenido el disfrute de la misma, la falta de información en el traslado inicial entre regímenes pensionales se refrendaría o convalidaría, ya que se trata de un nuevo acto jurídico acaecido en este caso, el 13 de enero de 2015, fecha en la cual la AFP COLFONDOS S.A. notificó al demandante sobre el reconocimiento de la pensión de vejez, tal como se deduce del documento de folios 23 del plenario, y le informó desde ese mismo momento que su mesada pensional sería por la suma de \$3644.350 y que le cancelaría 12 mesadas pensionales al año, con un pago adicional en el mes de junio, situación que efectivamente se concretó según se advierte de los documentos obrantes a folios 23 y 24 , aspectos que no puede pasar por alto esta superioridad, pues en los documentos referenciados se plasma la voluntad del accionante de acceder a la pensión de vejez del RAIS.

En el caso de la actora la pensión se financió con los ahorros existentes en la cuenta de ahorro individual, suscribiendo un nuevo acto jurídico con efectos particulares y concretos, razón por la cual, una vez comenzó el disfrute pensional a partir de febrero de 2017 (folio 89), la demandante adquirió plenamente la calidad de pensionada, y por ende, siguiendo el criterio jurisprudencial sentado por este Tribunal se hace improcedente la declaratoria de ineficacia deprecada en la demanda.

Esta posición fijada por este Tribunal ha sido avalada por la Corte Suprema de Justicia, Corporación en reciente sentencia SL 373 de 2021, en la que abandona el criterio sentado en la sentencia CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31989, respecto a la invalidación del traslado de un régimen a otro cuando quien demanda es un pensionado en el RAIS, de la siguiente manera:

*“Es un hecho acreditado que Cárdenas Gil disfruta de una pensión de vejez desde el año 2008, en la modalidad de retiro programado, a cargo de COLFONDOS S.A. Esta circunstancia conduce a la Corte a interrogarse si es posible, bajo el manto de la ineficacia de la afiliación, que el demandante pensionado del régimen de ahorro individual con solidaridad, vuelva al mismo estado en el que se encontraba antes de su traslado al RPMPD.*

*Para la Corte la respuesta es negativa, puesto que si bien esta Sala ha sostenido que por regla general cuando se declara la ineficacia de la afiliación es posible volver al mismo estado en que las cosas se hallarían de no haber existido el acto de traslado (vuelta al statu quo ante), lo cierto es que la calidad de pensionado es*

*una situación jurídica consolidada, un hecho consumado, un estatus jurídico, que no es razonable revertir o retrotraer, como ocurre en este caso. No se puede borrar la calidad de pensionado sin más, porque ello daría lugar a disfuncionalidades que afectaría a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas, y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros y del sistema en su conjunto.”*

En razón a las consideraciones de hecho y derecho expuestas en precedencia, se confirmará en esta instancia la decisión del Juez de primera instancia de negar la declaratoria de ineficacia del traslado del demandante al RAIS y por ende el reconocimiento de la pensión de vejez a cargo de COLPENSIONES.

SIN COSTAS en esta instancia por haberse conocido la sentencia en el grado jurisdiccional de CONSULTA.

## **6. DECISIÓN:**

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **RESUELVE**

**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia del 19 de julio de 2022 proferida por el JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en el proceso ordinario laboral promovido por la señora **PATRICIA DEL CARMEN HENAO ECHAVARRIA** contra **COLPENSIONES y PORVENIR S.A.**

**SEGUNDO: SIN COSTAS** en esta instancia.

La anterior sentencia se notifica a las partes en EDICTO.

Oportunamente devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada, y se firma por quienes en ella han intervenido, los magistrados,

Firmado Por:

Francisco Arango Torres  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **45436c9f730f0e431aa7dd6f85d9603d632a5a5a5175b9badbfaa9811f14e079**

Documento generado en 19/05/2023 02:43:24 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>